idad demandante, "Apolo Films, S. A.", frente a la demandada Administración General del Estado, representada y defendida por el señor Abogado del Estado; contra la denegación presunta, producida por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Cinematografía del Ministerio de Cultura, Subdirección General de Empresas Cinematográficas, Sección de Películas Extranjeras, de 20 de junio de 1978, a que la demanda se contrae; debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho y por consiguiente formalmente nulos los referidos actos administrativos impugnados; mandando reponer las actuaciones del expediente número 225/78, donde los mismos se produjeron, al momento procedimental en que conocida por la Administración demandada la existencia como interesada en el mismo de la Entidad "Apolo Films, S. A.", debió primero comunicarle la tramitación del mismo y, posteriormente, ponérselo de manifiesto para que, en el plazo no inferior a diez días ni superior a quince, pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara pertinentes; sin que haya lugar a pronunciarse sobre el resto de las pretensiones que la demanda postula; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. »

Contra la precedente sentencia de la Audiencia Nacional fue interpuesto recurso de apelación por el señor Abogado del Estado, habiendo recaído sentencia en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 25 de enero de 1983, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional —Sección Segunda— de fecha 27 de febrero de 1981, dictada en el recurso número 21.131/79 de su registro, cuya sentencia confirmamos íntegramente; sin hacer especial condena de las costas de esta apelación.

Así por esta nuestra sentencia que se insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. »

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Madrid, 18 de abril de 1983.—P. D., el Director general de Servicios, Emilio Fernández Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Cinematografía.

16424 *ORDEN de 18 de abril de 1983 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo, seguido entre la Administración General del Estado y el «Banco de Crédito Industrial, S. A.».*

Ilma. Sra.: En el recurso contencioso-administrativo número 21.226, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, entre el «Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anónima», como demandante, y la Administración General del Estado, como demandada, contra resolución del Ministerio de Cultura de 19 de julio de 1979, ha recaído sentencia en 23 de marzo de 1981, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por el Procurador don Javier Domínguez López, en nombre y representación del Banco de Crédito Industrial, contra el acuerdo dictado en alzada por el Ministerio de Cultura el 19 de julio de 1979, confirmatorio del de la Dirección General de Cinematografía de 13 de octubre de 1978, los que anulamos por su no conformidad a derecho y en su lugar declaramos que deben ser abonadas al recurrente las sumas que por los conceptos de intereses y de demora representan un total de 2.642.061 pesetas, más la demora correspondiente al tipo pactado hasta la fecha en que tenga lugar el pago; todo ello sin expresa condena en costas.»

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Contra la precedente sentencia de la Audiencia Nacional fue interpuesto recurso de apelación por el señor Abogado del Estado, habiendo recaído sentencia en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 14 de diciembre de 1982, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la Administración contra

la sentencia de fecha 23 de marzo de 1981, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, debemos confirmar la misma en todos sus extremos; todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas de esta instancia.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos las referidas sentencias, publicándose el fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de abril de 1983.—P. D., el Director general de Servicios, Emilio Fernández Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Cinematografía.

16425 *ORDEN de 20 de abril de 1983 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en recurso contencioso-administrativo seguido entre don Ricardo Moreno Torres y la Administración General del Estado.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 21.673, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, entre don Ricardo Moreno Torres, como demandante, y la Administración General del Estado, como demandada, ha recaído sentencia en 23 de octubre de 1981, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Monsalve Gurrea en nombre y representación de don Ricardo Moreno Torres, contra la resolución del Ministerio de Cultura de fecha 2 de octubre de 1980, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos de 30 de abril de 1980, debemos anular y anularamos dichas resoluciones por no ser conformes a derecho, declarando la caducidad del derecho por parte del Estado para ejercitar el derecho de tanteo sobre tres obras de arte propiedad de don Ricardo Moreno Torres a que se refieren dichas resoluciones, sin hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos, la referida sentencia, publicándose el fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de abril de 1983.—P. D., el Director general de Servicios, Emilio Fernández Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes y Archivos.

16426 *RESOLUCION de 5 de abril de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, en Villar de Aguila-Torrejoncillo del Rey (Cuenca).*

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, en Villar de Aguila-Torrejoncillo del Rey (Cuenca).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Villar del Aguila-Torrejoncillo del Rey que, según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y 6.º del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de abril de 1983.—El Director general, Manuel Fernández Miranda.

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

16427 RESOLUCION de 2 de mayo de 1983, de la Dirección General de Administración Local, por la que se aprueba la supresión de la plaza de Director de Banda de Música del Ayuntamiento de Benifayó (Valencia).

De conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 71.1, en relación con el artículo 86.2 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, y visto el acuerdo de la Corporación, esta Dirección General ha resuelto suprimir la plaza de Director de Banda de Música del Ayuntamiento de Benifayó (Valencia).

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de mayo de 1983.—El Director general, José Mariano Benítez de Lugo y Guillén.

ADMINISTRACION LOCAL

16428 RESOLUCION de 29 de mayo de 1983, de la Diputación Provincial de Badajoz, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras que se citan.

En uso de las atribuciones que confiere el artículo 289 de la Ley de Régimen Local y previo acuerdo Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, adoptado en sesión ordinaria de 28 de enero de 1983, se procede a la instrucción de expediente de expropiación forzosa, por causa de utilidad pública, de los bienes y derechos expresados en este anuncio y que son los que resultan afectados por la ejecución de la obra número 110 del plan parcial de obras y servicios de 1981, denominada «Conducción de aguas en Reina», siendo el beneficiario el Ayuntamiento de Reina, y aplicándose el procedimiento de urgencia que se establece en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, sin previo acuerdo del Consejo de Ministros, por autorizarlo así el Real Decreto número 2689/1981, de 13 de noviembre, que establece medidas urgentes en la aprobación y ejecución de los planes provinciales de obras y servicios del ejercicio de 1981. En consecuencia, esta Diputación Provincial dispone proceder al levantamiento del acta previa a la ocupación del derecho sobre la finca que se describe, lo cual se llevará a efecto el próximo día 5 de julio, a las doce horas.

Este acto tendrá lugar a partir de la hora indicada en el Ayuntamiento de Reina, sin perjuicio de trasladarse al terreno si así se estimara conveniente.

El propietario afectado deberá asistir personalmente o por medio de representante debidamente autorizado para actuar en

su nombre, aportando los documentos públicos y privados acreditativos de su titularidad, así como el último recibo de la contribución de la finca, pudiendo acompañarse —a su costa— de un Perito y un Notario.

Hasta el levantamiento del acta podrán formularse por escrito y ante esta Diputación Provincial de Badajoz, cuantas alegaciones se considere oportunas, a los efectos de subsanación de posibles errores.

Badajoz, 29 de mayo de 1983.—El Presidente, Luciano Pérez de Acevedo y Amo.—7.755-E.

DERECHOS AFECTADOS

Localización de la finca objeto de expropiación: Parcela de olivares que linda: al Oeste, con fincas 14, 15, 16 y 18; Sur, con fincas 20, 21, 22, 23, 24, 25 y calleja de «Los Patillos», en el término municipal de Reina. (Los números de las fincas corresponden a la denominación del plano parcelario redactado por el Servicio de Valoración Urbana del Ministerio de Hacienda, en mayo de 1973).

Superficie objeto de la expropiación: Banda de terreno de seis metros de ancho en una longitud de 133 metros. (798 metros cuadrados).

16429- RESOLUCION de 30 de mayo de 1983, de la Diputación Provincial de Badajoz, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras que se mencionan.

En uso de las atribuciones que confiere el artículo 289 de la Ley de Régimen Local y previo acuerdo del Pleno de la excelentísima Corporación Provincial de Badajoz, adoptado en sesión ordinaria de 28 de enero de 1983, se procede a instrucción de expediente de expropiación forzosa, por causa de utilidad pública de los bienes y derechos que se expresan en este anuncio, que resultan afectados por la ejecución de la obra número 25, del plan parcial de obras y servicios de 1981, denominada: «Prolongación de colectores en Fuenlabrada de los Montes», siendo el beneficiario el Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes, y aplicándose al expediente que se incoa el procedimiento de urgencia que se establece en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, sin previo acuerdo del Consejo de Ministros, por así autorizarlo el artículo 5 del Real Decreto 2689/1981, de 13 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes en la aprobación y ejecución de los planes provinciales de obras y servicios del ejercicio de 1981. En consecuencia, dispone esta Diputación Provincial proceder al levantamiento del acta previa a la ocupación del derecho sobre las fincas que se describen, fijándose para dicho levantamiento las doce horas del día 6 de julio, próximo.

Este acto tendrá lugar a partir de la hora indicada en el Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes, sin perjuicio de trasladarse a los terrenos, si así se estimara conveniente.

Los propietarios afectados deberán asistir personalmente o por medio de representante debidamente autorizado para actuar en su nombre, aportando los documentos públicos y privados acreditativos de su titularidad, así como el último recibo de la contribución de la finca, y pudiendo hacerse acompañar —a su costa— de un Perito y un Notario.

Hasta el levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán formularse por escrito y ante esta Diputación Provincial de Badajoz, cuantas alegaciones se considere oportunas, a los efectos de subsanación de posibles errores.

Badajoz, 30 de mayo de 1983.—El Presidente, Luciano Pérez de Acevedo y Amo.

DERECHOS AFECTADOS

Objeto de la expropiación: Franja de 131 metros lineales entre las calles Arroyo (General Prim) y San Isidro, para servidumbre de desagüe de alcantarillado (tubería) de 300 milímetros de diámetro, con dos pozos de registro y derecho de paso para su conservación, mantenimiento y reparación en una anchura de dos metros a lo largo del trazado. (262 metros cuadrados).